



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1

Expte nº: 4092 / 2024 - AML

Autos: “SOCIEDAD ITALIANA DE BENEFICENCIA EN BUENOS AIRES c/
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE
DEUDA”

Sentencia Definitiva del Expte Nro. 4092/2024

Buenos Aires,

AUTOS Y VISTOS:

1) Surge de autos que mediante la Resolución N ° 2023-1463-E-AFIP -DEIMPR#SDGTLSS, la Administración Federal de Ingresos Públicos, rechazó la impugnación presentada por la contribuyente contra las actas de inspección e infracción labradas bajo la orden de intervención nro. 1.539.478; ratificando la deuda y multa aplicadas exclusivamente en relación al decaimiento del beneficio de reducción de contribuciones establecido por la ley 26.476, en los términos expuestos en el dictamen que antecede.

De todo ello, se notificó a la contribuyente, haciéndosele saber que la resolución era susceptible de ser revisada por medio del procedimiento establecido en el punto 8 de la Resolución 79/98 AFIP, o por la vía del recurso de apelación ante esta Alzada, debiendo depositar dentro de los plazos correspondientes el importe resultante de la resolución administrativa (cfr. art. 15 de la ley 18.820 y art. 39 bis del decreto-ley 1285/58 modificada por la ley 24.463).

Conforme se desprende de las presentes actuaciones, la parte actora recurre a esta instancia judicial, sin efectuar el pago previo a la apelación como requisito de admisibilidad. En su reemplazo, la recurrente ofreció seguro de caución, de acuerdo con la póliza emitida por Afianzadora Latinoamericana Cia. De Seguros S.A

Al respecto, esta Sala en autos “Parflik S.A.C.I.F.I.A.”, de conformidad con las conclusiones expuestas en el dictamen del Sr. Fiscal General N° 4935/93 (Fiscalía General N° 2) de fecha 22/12/93, sostuvo que el depósito previo a la apelación que exige el art. 15 de la ley 18.820 para la concesión del recurso importa el cumplimiento provisional y adelantado de la condena, constituyendo así una razonable medida precautoria impuesta en salvaguarda del interés colectivo comprometido. (SD 57.859, del 14/4/94). En idéntico sentido, la Sala II en autos “Compañía de Servicios Hoteleros S.A. c/ AFIP – DGI s/ Impugnación de deuda”, SD 110.602, la Sala III en autos “Treves Argentina S.A. c/ AFIP – DGI s/ Impugnación de deuda y esta Sala I en autos “Frigorífico Gorina S.A.I.C. c/ A.F.I.P. – D.G.I s/ Impugnación de deuda”, SD 124.944.

En consecuencia, la fianza acompañada, garantiza el pago de las obligaciones reclamadas, en virtud del principio “solve et repete”, por lo que debe eximirse al recurrente de la carga impuesta en la normativa reseñada y declarar formalmente admisible el recurso.



2) La parte actora se agravia de la resolución recurrida, en tanto al resolver el organismo fiscal entendió que se había configurado el supuesto previsto en el art. 20 inc. a) de la ley 26.476, y dio por decaídos los beneficios de reducción de contribuciones. Es así que plantea la nulidad de las actas de determinación de deuda, al considerar que en aquellas no se encontraban individualizados los casos que daban motivo al mencionado decaimiento. Por tal motivo carecerían de motivación dado que no surgían de manera concreta cuáles eran las razones y argumentos en los que se fundó la pretensión fiscal.

Argumenta que no incurrió en ninguna causal de decaimiento, por un lado AFIP tenía conocimiento de los juicios laborales –cuyos actores fueron Barchietto, Mele, Slepoy, Rosenberg, Santos y Cravero)- con anterioridad al 24/12/08 –fecha de entrada en vigencia de la ley 26.476-, por lo que considera que mal podía constatar una situación que ya estaba en su conocimiento. A lo que agrega que, los individuos con sentencias laborales fueron incluidos, cuando la empresa se acogió a los beneficios de sinceramiento fiscal establecidos por la ley 27.260, por lo que dicha circunstancia significó la condonación total de la multa y la liberación de los casos como causales de exclusión.

Asimismo, manifiesta que nunca tuvo conocimiento de los casos por los cuales se alegaba el decaimiento del beneficio de reducción de contribuciones patronales.

Finalmente se agravia de la multa aplicada, en el entendimiento que hay ausencia de elemento subjetivo que integra el ilícito fiscal. Asimismo, plantea la inconstitucionalidad del art. 20 inc. a de la ley 26.476.

3) Previo a resolver la cuestión de fondo, corresponde señalar que con relación al planteo que las actas recurridas carecen de los requisitos propios del acto administrativo, es dable destacar que conforme Juan Gilibert, en “ El Derecho a la legítima defensa en el sistema jubilatorio argentino” (L.T, pág. 385/6), las diligencias que se cumplen con la intervención de los funcionarios competentes y se instrumentan a través de las actas de verificación, que se notifican al interpelado, no reúnen los requisitos esenciales ni generales de un acto administrativo y ello por cuanto no ha mediado una decisión fundada que cause estado, pues hasta tanto no se haya agotado el procedimiento regulado por la ley 18.820 y que da lugar a la ejecución, no es un acto administrativo definitivo, contando el obligado con los medios legales apropiados para demostrar la improcedencia del débito intimado.

Es sólo la conformidad del contribuyente, mediante la no impugnación de las actas, lo que permite al fisco proceder a su cobro, y si, por el contrario, se muestra disconforme con la deuda o infracción, la ley 18.820 pone a su alcance el procedimiento recursivo adecuado para fundamentar sus agravios. Sólo después de una decisión fundada, acto administrativo definitivo, contraria a la pretensión del recurrente, se habilitará a la ejecución fiscal, siempre y cuando no medie apelación ante la Excma. Cámara Federal de Seguridad Social, pues entonces deberá esperarse una sentencia favorable de ésta a los intereses fiscales.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1

Como consecuencia lógica de lo expuesto, cabe concluir que las actas de inspección e infracción no son más que una constatación que hace la Administración de la situación del contribuyente, por lo que no cabe exigir de las mismas los requisitos propios de los actos administrativos, como tampoco que sean realizadas por juez administrativo, ya que por tratarse de constataciones las mismas pueden ser cuestionadas- tanto la deuda como la multa- y dar nacimiento posteriormente al proceso que nos ocupa. Por todo lo expuesto, corresponde la desestimación del agravio esgrimido por el apelante en este sentido.

4) Entrando a resolver la cuestión traída a conocimiento de este tribunal, cabe señalar que la ley 26.476 estableció un régimen de regularización impositiva, promoción y protección del empleo registrado, exteriorización y repatriación de capitales. Además, perseguía la promoción del empleo registrado, el encauzamiento de las relaciones no registradas y la generación de nuevos puestos de trabajo.

En el marco de la mencionada norma, el Hospital Italiano argumenta que incrementó en más de mil cuiles su nómina de empleados.

Sentado ello, la AFIP en la resolución recurrida ratificó la deuda y multa aplicadas por aquellas, exclusivamente en relación al decaimiento del beneficio de reducción de contribuciones establecido en la ley 26.476. Para dar por decaído el beneficio, tuvo en cuenta sentencias judiciales con relaciones laborales que se encontraban controvertidas.

Es dable destacar que la jurisprudencia del fuero se ha pronunciado sobre la correcta individualización de los empleados por los que se genera un conflicto, a los fines de garantizar el derecho de defensa.

Así, en orden a la cuestión traída a conocimiento de este Tribunal, a priori se puntualiza que más allá del marco normativo referido, en la presente se analizará el procedimiento llevado a cabo para determinar la deuda que se discute en autos. De esta manera, ha de ponderarse que el procedimiento administrativo haya asegurado el pleno y cabal conocimiento del interesado de la gestión llevada a cabo, permitiéndole argumentar, producir y controlar todas las medidas de prueba que proponga y hagan a su derecho, como así también las que la propia administración impulse en su búsqueda de la verdad. Con ello, no sólo se garantiza el derecho de defensa de éste, sino una mayor racionalización y eficacia de los trámites administrativos, facilitándose a los funcionarios que deben expedirse una información más amplia y completa.

Posteriormente, compete al organismo administrativo apreciar las probanzas producidas, no ya en base a principios rígidos, sino de manera lógica y natural, aquilatando cada una de ellas en su individualidad y dentro del conjunto de la rendida (cfr. Sala II, en autos "CENTAURO S.A. c/ Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social s/ Impugnación de deuda", sentencia definitiva del 11/05/21).



De esta manera, “El organismo previsional aún cuando legalmente pueda formular cargos, debe actuar cuidadosamente para no caer en arbitrariedad, atentando contra los derechos y garantías del particular, amparados por nuestra Constitución Nacional. De allí que es imperioso para permitir la adecuada defensa de esos derechos y garantías, que cada imputación que formule se encuentre individualizada, relacionando cada caso con la naturaleza de la prestación que se pretende adjudicar (cfr. C.N.A.S.S., Sala I, sent. del 14.04.94, "Parflik S.A.C.I.F.I.A.").

Asimismo, en materia de imposición de leyes impositivas “se debe atender con el fin por el que han sido dictadas (Fallos 329:275). Y, particularmente las normas que estatuyen beneficios de carácter fiscal no deben interpretarse con carácter restrictivo

Que el texto admite, en forma tal que el propósito de la ley se cumpla de acuerdo a los principios de una razonable y discreta crítica más una razonable interpretación, lo que vale tanto como admitir que las exenciones tributarias pueden resultar del indudable propósito de la norma y de su necesaria implicancia (Fallos 296:253; 308:2554).

Así puede concluirse que la interpretación efectuada por el organismo del art. 20 de la ley 26.476 no se aviene al espíritu de la norma ya que, equipara el reconocimiento por parte de la justicia de relaciones laborales controvertidas con personal no registrado y, tras ello, el decaimiento del beneficio.

El organismo debió analizar el origen de los juicios laborales y no concluir lisa y llanamente en que con la emisión de las sentencias se configuraba la causal de exclusión del beneficio.

AFIP –actualmente ARCA- además de cumplir con su función en caso como los de autos, debería fiscalizar el cumplimiento de la normativa y, a además velar por el éxito de este tipo de planes a los efectos de su objetivo, que es el de recaudar.

Por todo lo expuesto corresponde hacer lugar al recurso deducido y revocar la resolución dictada por el organismo de acuerdo a los fundamentos expuestos en la presente.

Atento a como se resuelve la cuestión resulta abstracto expresarse sobre los restantes agravios.

5) Dado el resultado alcanzado, dada la particularidad de la temática abordada, pudo válidamente generar en la parte actora la creencia de que contaba con un mejor derecho a litigar o, al menos, de lograr esa respuesta en el ámbito judicial. Por esa razón, las costas deben distribuirse en el orden causado (artículo 68, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1

Por ello, de conformidad con el dictamen del Sr. Fiscal General, este TRIBUNAL RESUELVE: 1) Declarar formalmente admisible el recurso; 2) Confirmar la resolución recurrida de acuerdo a las fundamentaciones expuestas precedentemente. 3) Costas por su orden. 4) Ordenar al organismo a que reintegre la suma depositada por el apelante para acceder a la instancia judicial, con más sus intereses a la tasa promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina, desde la fecha en que se hizo efectivo el depósito y hasta su devolución al depositante (conf. Art. 10, dto. 341/91; C.S.J.N. L. 44. XXIV “López, Antonio Manuel c/ Explotación Pesquera de la Patagonia S.A., sentencia del 10/06/92 y Fallos 303:1769; 311:1644, entre otros

Regístrese, notifíquese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública –dependiente de la CSJN (conf. Ac. 10/25) y, oportunamente, remítase.

